

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR)

La Jagua de Ibirico, Septiembre Veintiséis (26) de Dos Mil Veintidós (2022)

ACCIÓN DE TUTELA – DERECHO DE PETICIÓN

ACCIONANTE: OSCAR EMILIO RODRIGUEZ BAQUERO

ACCIONADO: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

RADICACIÓN: 204004089001-2022-00345-00

Se procede a dictar la sentencia que corresponda en este asunto de la referencia, estando en término para ello, dentro de esta acción de tutela instaurada por **OSCAR EMILIO RODRIGUEZ BAQUERO** contra la **ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO**, para que se amparen los derechos violados como es el Derecho de Petición.

El accionante fundamentó la acción entre otras cosas en los siguientes:

HECHOS

Manifiesta el accionante que, es propietario del inmueble urbano identificado con matrícula inmobiliaria No.192-7294 registrado en la oficina de Instrumentos Públicos de Chimichagua-Cesar y cédula catastral No. 01010098002600, ubicado en la transversal 1G-Diag. 1 del municipio de La Jagua de Ibirico-Cesar.

Igualmente indica el actor que, solicitó ante la empresa de Servicios Públicos AAA de este municipio la instalación de acueducto y alcantarillado en su predio, sin embargo, está se negó debido a que le indicó de algunos vestigios y/o estructuras construidas en su predio y otras irregularidades por parte de la Alcaldía Municipal, por ello, el día 13 de mayo de 2022 el afectado instauró Derecho de Petición con el fin de que se le proporcione información y así mismo, solicitar el retiro de tales estructuras.

Tal derecho de petición menciona lo siguiente,

1. *“Solicito se me informe si los vestigios o estructuras que se encuentran en mi predio, anteriormente identificado, fueron construidas por la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico, y de ser esto cierto, se me indique cual es el proyecto razón de su realización”*
2. *“Solicito se me informe cuál es el vínculo jurídico que existe entre el predio urbano distinguido con cédula catastral No. 01010098002600 e identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 192-7294 y la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico”*
3. *En caso de que las estructuras o vestigios que se encuentran actualmente en el predio sean del municipio, solicito que se haga el retiro de las mismas o en su caso, se conceda el permiso para su retiro, toda vez que en dicho inmueble realizaré ciertas adecuaciones”*

Que, en consecuencia, de lo anterior a manera de conclusión manifiesta la parte actora, que a la fecha han transcurrido más de quince (15) días hábiles sin que se tenga respuesta clara, congruente, y de acuerdo con lo solicitado.

PETICIÓN

PRIMERO: Ordenar a la **ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR-SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL- SECRETARIO DE GOBIERNO-OFICINA JURIDICA** representada legalmente por el señor alcalde Ovelio Enrique Jiménez Machado que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo de primera instancia, proceda a resolver de fondo y de manera completa y congruente a lo solicitado en el Derecho de Petición instaurado el día 13 de mayo de la presente anualidad.

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

ACTUACIÓN PROCESAL

La acción de tutela fue admitida mediante auto de fecha Trece (13) de Septiembre del año Dos Mil Veintidós (2022), ordenándoles a la accionada rendir informe dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de dicho auto, notificándosele a las partes y a la Personera Municipal.

RESPUESTA DE LA OFICINA JURÍDICA, DE LA JAGUA DE IBIRICO

Una vez presentado el informe al despacho, la parte accionada manifiesta que es menester aclarar que el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 192-7294 y cédula catastral No. 2040001010098002600, se encuentra en segunda instancia dentro del proceso vigente de Restitución de tierras acorde a ley 1448 de 2011, por lo que no se encuentra definida la titularidad de este hasta tanto se surtan y se definan las etapas del proceso. Así mismo, afirman que el accionante presentó derecho de petición pero que desconocen la solicitud que realizó a la empresa de servicios públicos AAA y por último, en consecuencia de todo lo dicho anteriormente, la accionada manifiesta que sí fue contestada de fondo la solicitud hecha por el accionante, tal como se evidencia a continuación en la respuesta que le remitió del Derecho de Petición;

1. *“Solicito se me informe si los vestigios o estructuras que se encuentran en mi predio, anteriormente identificado, fueron construidas por la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico, y de ser esto cierto, se me indique cual es el proyecto razón de su realización”*

La accionada manifiesta que en relación con dicha solicitud manifiesta que, las estructuras mencionadas por el accionante si fueron construidas por la Alcaldía Municipal de la época, pero que se les imposibilita poder indicarle cuál es el proyecto en razón a su realización, que, si bien es cierto, tienen conocimiento del proceso concerniente a este predio, pero que de igual forma se les ha hecho imposible localizar el expediente donde reposa el proyecto antes mencionado.

2. *“Solicito se me informe cuál es el vínculo jurídico que existe entre el predio urbano distinguido con cédula catastral No. 01010098002600 e identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 192-7294 y la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico”*

La parte accionada declara que es menester informarle que, el predio en mención ubicado en la Transversal 1G con Diagonal 1 del municipio de la Jagua de Ibirico (Cesar), identificado con matrícula inmobiliaria No. 192-7294 y cédula catastral No. 2040001010098002600, se encuentra en segunda instancia dentro del proceso vigente de Restitución de Tierras acorde a la ley 1448 de 2011, por lo cual no se encuentra definida la vinculación del predio en cuestión con la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico hasta tanto no cese el Litigio pendiente.

3. *En caso de que las estructuras o vestigios que se encuentran actualmente en el predio sean del municipio, solicito que se haga el retiro de las mismas o en su caso, se conceda el permiso para su retiro, toda vez que en dicho inmueble realizaré ciertas adecuaciones”*

De igual forma, la parte accionada indica que no es posible acceder a la presente solicitud debido a que como se manifestó anteriormente, la vinculación o relación del predio se encuentra indefinida, toda vez que el mismo se encuentra en litigio, y es menester acatar y conocer la decisión en segunda instancia.

PRUEBAS RECAUDADAS

Como pruebas documentales se tienen como tales las acompañadas con el escrito de tutela y las aportadas con el informe rendido por la parte pasiva de la acción.

PROBLEMA JURÍDICO

Surgen del escrito de tutela, como de las pruebas recaudadas, surgen los siguientes interrogantes: ¿Si están llamada a prosperar esta acción de tutela por la presunta violación al derecho fundamental, a la información que consagra el artículo 23 de la Constitución Nacional por parte de la accionada, al no contestarle al accionante un derecho de petición que le radicó? o ¿por el contrario esta no ha violado derecho alguno al actor?

R. B. B. B. B.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data management. It discusses how advanced software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It provides guidance on implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and breaches.

5. The fifth part of the document explores the importance of data quality and integrity. It discusses strategies for identifying and correcting errors in data, ensuring that the information used for analysis is accurate and reliable.

6. The sixth part of the document discusses the ethical considerations surrounding data collection and use. It emphasizes the need for transparency in data practices and the importance of obtaining informed consent from individuals whose data is being collected.

7. The seventh part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of a comprehensive data management strategy that encompasses all aspects of data collection, storage, analysis, and security.

8. The final part of the document offers concluding thoughts on the future of data management. It suggests that continued investment in technology and training will be essential for organizations to stay competitive in an increasingly data-driven world.

Sentado los supuestos de hecho en que se funda la presente Acción se impone descender al caso controvertido, previas unas breves,

CONSIDERACIONES

Estudiada la Acción de Tutela presentada por **OSCAR EMILIO RODRIGUEZ BAQUERO**, contra la **ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO**, evidencia el despacho que la misma es producto de la supuesta desatención a la cual fue sometida la petición realizada por el accionante el 13 de mayo de 2022 y que aparentemente no fue contestada como señala la ley de manera pronta y oportuna.

INMEDIATEZ

La jurisprudencia de la corte constitucional ha sido clara en señalar que la procedencia de la acción de tutela se encuentra sujeta al cumplimiento del requisito de -inmediatez, Al respecto, ha precisado que la protección de los derechos fundamentales, vía acción constitucional, debe invocarse en un plazo razonable y oportuno contado entre la ocurrencia del hecho generador de la transgresión y la interposición del amparo. Lo anterior, en procura del principio de seguridad jurídica y de la preservación de la naturaleza propia de la acción de tutela.

Ahora que si bien es cierto la acción de tutela no tiene un término de caducidad, ello no debe entenderse como una facultad para promover la misma en cualquier tiempo. Lo anterior, por cuanto, a la luz, del artículo 86 superior, el amparo constitucional tiene por objeto la protección inmediata de los derechos fundamentales.

En este orden de ideas, le corresponde al juez constitucional verificar el cumplimiento del principio de inmediatez y en efecto constatar si el tiempo transcurrido entre la aparente violación o amenaza del derecho y la interposición de la tutela es razonable.

En el caso sub examine se estima superado el presupuesto de la inmediatez por cuanto el actor solicitó el amparo en un término razonable, esto es, menos de seis meses después de ocurrido el hecho generador de la presunta vulneración de los derechos invocados.

Procedencia excepcional de la acción

Como quiera, que, en esta Acción de Tutela, se plasma la presunta violación de un Derecho Fundamental como es el derecho de petición y al conceptuar se concluye que si tiene la categoría de fundamental. Efectivamente el mecanismo escogido por el accionante es el idóneo y eficaz, por ello el medio escogido es procedente a la luz del artículo 86 de la Carta Política y el Decreto 2591 de 1991, 1983 de 2017 artículo 5 ibídem y el Decreto 333 de 2021.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados, o si no obstante su concurrencia, es necesario su ejercicio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

La efectividad de este trámite radica en la posibilidad de que el juez, si observa que en realidad existe la vulneración o amenaza alegada por quien solicita protección, imparta una orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho en disputa.

Derecho Fundamental cuya protección se invoca

El derecho de petición:

El derecho de petición fue establecido en el artículo 23 de la Constitución, donde se prevé que *“toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”*.

Durante los primeros años de vigencia de la Constitución de 1991, la norma legal de referencia para el derecho de petición fue el Decreto 01 de 1984 Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo, que regulaba su ejercicio entre los artículos 5, 6, 7, 8, 31, 32, 33 y 39, principalmente.

En dicho escenario la Corte Constitucional identificó los contenidos mínimos de ese derecho fundamental, señalando además el sistema de reglas que rigen su cumplimiento y aplicación, precisando que su contenido esencial comprende los siguientes elementos:



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in financial matters. The text notes that without clear documentation, it becomes difficult to track expenses and revenues, which can lead to misunderstandings and disputes.

2. The second section focuses on the role of technology in modern record-keeping. It highlights how digital tools and software solutions have revolutionized the way data is stored and accessed. These technologies not only improve efficiency but also reduce the risk of human error and data loss. The document suggests that organizations should invest in reliable digital systems to ensure their records are secure and easily retrievable.

3. The third part of the document addresses the legal and regulatory requirements surrounding record-keeping. It explains that various industries and jurisdictions have specific rules regarding how long records must be kept and what information must be included. Compliance with these regulations is crucial to avoid penalties and legal complications. The text provides a general overview of these requirements, encouraging organizations to consult with legal counsel for more detailed guidance.

4. The final section discusses the importance of regular audits and reviews of records. It states that periodic checks help identify any discrepancies or inaccuracies in the data, allowing for timely corrections. Audits also serve as a valuable tool for assessing the overall health and integrity of the record-keeping system. The document recommends that organizations establish a clear schedule for these reviews and assign responsibility to specific personnel.

"a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo."

Conforme lo dispone la jurisprudencia de la Corte Constitucional y lo ha venido reiterando, el ejercicio del derecho de petición en Colombia está regido por las siguientes reglas y elementos de aplicación.

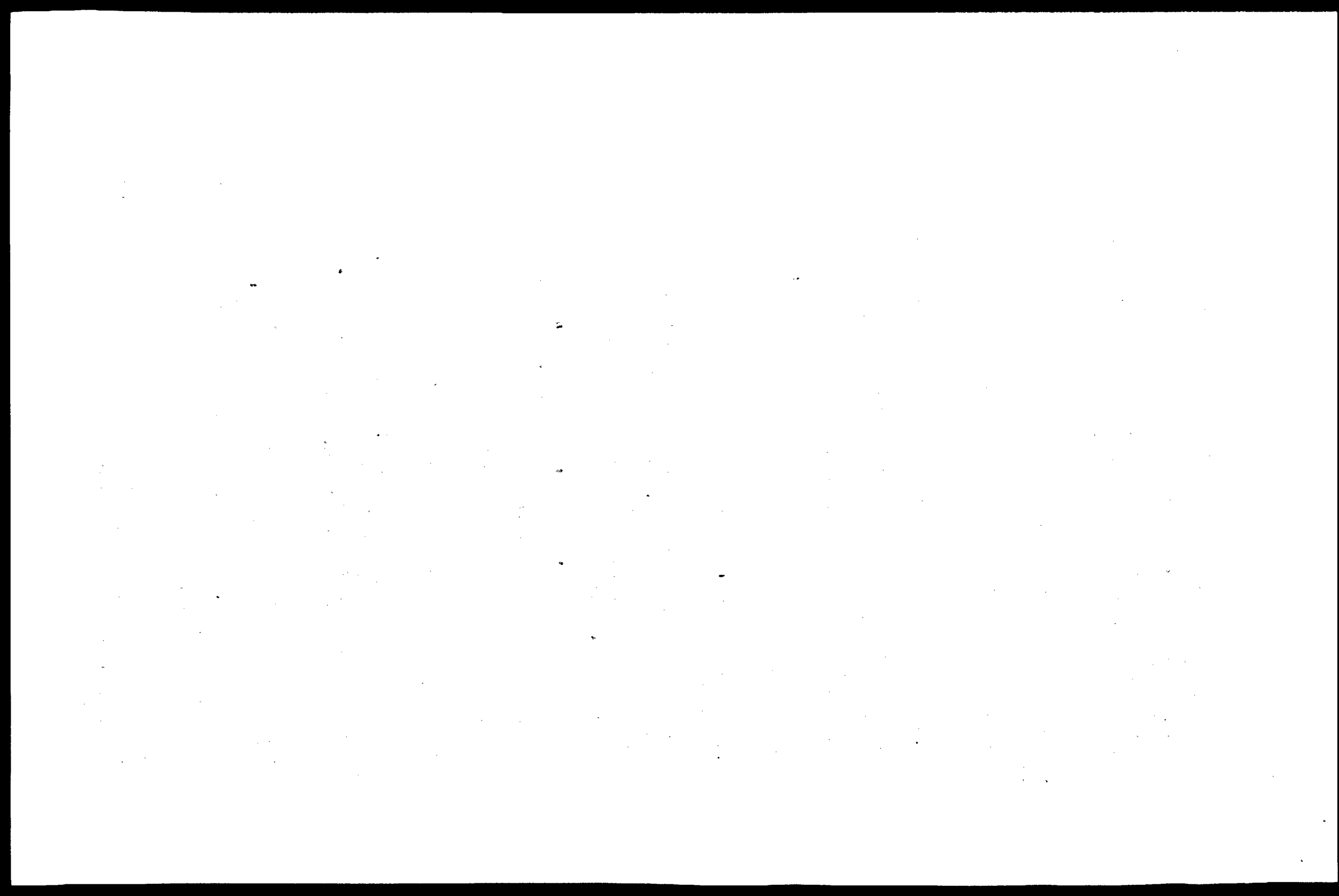
- 1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.*
- 2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.*
- 3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. (El subrayado es del Despacho).*
- 4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita.*
- 5) El derecho de petición fue inicialmente dispuesto para las actuaciones ante las autoridades públicas, pero la Constitución de 1991 lo extendió a las organizaciones privadas y en general, a los particulares.*
- 6) Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiese darse la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación.*
- 7) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En sentido concurrente, el silencio administrativo es prueba de la violación del derecho de petición.*
- 8) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea el derecho de petición no la exonera del deber de responder.*
- 9) La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado".*

De igual forma cabe destacar que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional, ha sostenido que la pronta resolución de parte de la autoridad a quien se dirige la petición es donde este derecho fundamental adquiere toda su dimensión (núcleo esencial) como instrumento eficaz de la participación democrática, ya que así la persona recibe información y se posibilita la efectividad del resto de los derechos fundamentales y legales.

Así pues, dicha Corporación ha considerado que las autoridades y los particulares tienen la obligación de responder de manera oportuna, clara y precisa las peticiones que ante ellas se formulan, es decir, la garantía del derecho de petición, se satisface sólo con la respuesta y tiene esta categoría, aquello que decide, que concluye que afirma una realidad, que satisface una inquietud, que ofrece certeza al interesado. Por lo tanto, se revela vulneración de este derecho constitucional, cuando no hay respuesta a la petición formulada, cuando su resolución es tardía o no se aborda el fondo de la misma.

Caso Concreto.

Clarificado lo anotado líneas que preceden, procederá el Despacho a analizar el presente caso a la luz de las consideraciones precitadas, a fin de dar respuesta al problema jurídico planteado al inicio de estas consideraciones.



Al revisar los documentos probatorios aportados por las partes, se puede apreciar lo siguiente, que el actor alega que la petición que realizó ante la accionada el día 13 de mayo de 2022; al momento de presentación de la tutela no había sido contestada, a lo cual en contra posición la accionada afirma en su informe que, al peticionario se le emitió respuesta del 20 de septiembre de 2022, contestando a cada una de sus peticiones.

Ante esta situación esta casa de justicia realizó un estudio minucioso de cada una de las peticiones realizadas por el accionante y así mismo corroboró la respuesta emitida por la entidad accionada, análisis que nos permite concluir con claridad solar que la contestación desplegada por la querellada cumple a cabalidad con las peticiones planteadas por el accionante. Siendo así las cosas no se evidencia que la accionada le hubiese vulnerado al actor el derecho por él invocado en su acción constitucional, ello en virtud de que las respuestas corresponden a lo pedido por el actor, por lo que debe este despacho dejar sentado, que no necesariamente la respuesta ha de ser satisfactoria a lo pretendido, lo importante es que se conteste de manera clara, precisa y de fondo, requisito que este Juzgado evidencia que efectivamente la accionada cumplió en su contestación; por ello ha de decirse que la tutela debe ser negada por carecer de objeto la misma por lo ya anotado, en consecuencia al planteamiento jurídico se debe responder de manera negativa, además por estar frente a un hecho superado.

Carencia actual de objeto por hecho superado.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela tiene como objetivo amparar los derechos fundamentales de las personas ante la vulneración o amenaza ya sea por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular. Al respecto, esta Corte ha señalado que:

“... al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.” Sentencia T-308 de 2003

En este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha “precisado que la acción de tutela, en principio, “pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”. En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz. T-011 de 2016

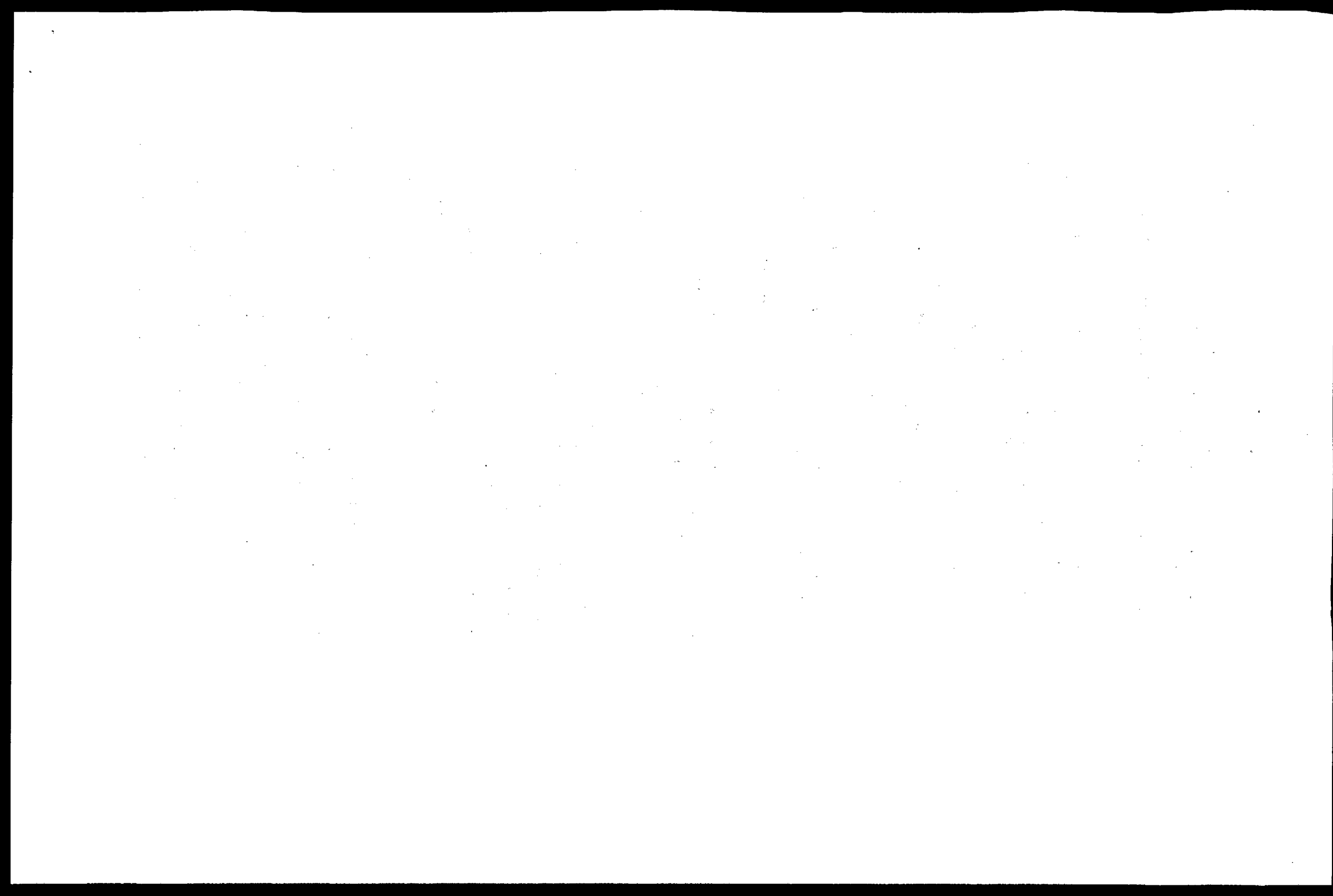
En ese orden, si la acción de tutela busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y “previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”¹. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela. T-168 de 2008

En cuanto al hecho superado, esta Corporación ha considerado que esa situación “no conduce a declarar la improcedencia de la acción, pues la Corte Constitucional puede estudiar el fondo del asunto para evaluar si hubo vulneración de las garantías superiores, en virtud de la función de pedagogía constitucional que también realiza a través de los fallos de tutela. Si bien, en estos eventos no se emiten ordenes ante la ineficiencia de las mismas, si la decisión proferida por el juez de tutela contraría los postulados constitucionales, la Corte debe revocarla”. T-523 de 2016

SOBRE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO

“La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo, la orden del juez de tutela no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”. Al respecto se ha establecido que

E. B. F.



esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho superado". (Sentencia T-059/16)

El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional.

En este supuesto, no es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se demanda, salvo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, ya sea para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera.

Por las razones expuestas, el Juzgado Promiscuo Municipal de la Jagua de Ibirico-Cesar, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la presente acción de tutela instaurada por **OSCAR EMILIO RODRIGUEZ BAQUERO** contra la **ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO**, al carecer de objeto la misma por lo ya anotado en la parte considerativa, y además por estar frente a un hecho superado.

SEGUNDO: Notifíquese este fallo a las partes y a La Personera Municipal por el medio más eficaz.

TERCERO: Si el presente fallo no es impugnado dentro del término de Ley, envíese a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.


CARLOS BENAVIDES TRESPALACIOS
JUEZ PROMISCO MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885